

## Seguridad vs. democracia

Nicolás Lynch

La alarma mediática sobre rebrotes senderistas, movilización social y falta de seguridad vecinal que se ha desarrollado en las últimas semanas tiene más que ver con el fracaso de nuestra transición a la democracia que con inacción policial. La debilidad democrática por supuesto no justifica la debilidad policial, pero como estamos en el país de los cucos es muy importante resaltar la primera.

Las fotos de los líderes senderistas que parecen arengar a todo el país, el panorama de movilización social en los más diversos lugares, los linchamientos de delincuentes comunes en barrios populares, parecen tener una característica parecida: la ausencia de autoridad que ponga orden en un supuesto caos. Cuán grave es esta situación en relación con momentos inmediatamente anteriores, es muy difícil saberlo. El senderismo está militarmente derrotado pero busca recomponerse políticamente, ya no constituye un peligro armado pero fácilmente se puede mezclar la amenaza anterior con su actitud presente para todo género de propósitos. Las movilizaciones expresan de distinta manera una demanda contenida y agudizada por años de indiferencia centralista y neoliberal, que no respeta autoridad antes que nada porque no la conoce. La inseguridad urbana, por otra parte, es una mezcla de la falta de oportunidades con una distribución agudamente clasista de los recursos de la seguridad pública.

En todos los casos lo que se pone en cuestión, real y figuradamente, es el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado, aquella característica central de cualquier aparato estatal que se defina como tal y que en nuestro país, a 183 años de la independencia, continúa indefinida. Pero tal monopolio sólo se reconoce como característica efectiva a aquellos estados que tienen legitimidad para mandar, características esta última que le falta de manera crónica al Estado en el Perú. La última transición a la democracia, abierta con la caída de Fujimori y frustrada por la incapacidad de este gobierno, ha sido otra oportunidad para legitimar al Estado, pero ya no como un orden de exclusiones y prebendas sino como un Estado democrático en el que nos reconozcamos todos los peruanos. Desafortunadamente la hemos perdido abriendo el paso a la desesperanza.

La frustración de la transición promueve el autoritarismo de diverso pelaje. Ya no sólo son los fujimoristas que buscan lavar sus culpas o salir de la cárcel, también están las élites que siempre han buscado la legitimidad por la fuerza y, sobre todo, aquellas minorías beneficiadas por el modelo neoliberal que quieren terminar con lo que denominan “ruido político”, habría que agregar ahora el “ruido social”, para elevar sus ganancias.

Es este autoritarismo, en cuya tentación parecen caer más y más líderes políticos y de opinión, el que busca responder a la inseguridad que estaría recorriendo el país esparciendo el temor colectivo y propiciando medidas que seguramente restringirán más nuestra democracia. Muy pocos miran al otro lado, a la frustración de la transición democrática y a la necesidad de legitimar al Estado promoviendo canales de participación efectiva para los ciudadanos en la solución de los asuntos que nos competen. Burlándose de las mayorías, como sucede por ejemplo con la postergación de las indispensables reformas constitucionales de fondo, lo que se propicia es un clima de mayor polarización

y desesperanza que no permite los mejores augurios para nuestro precario régimen político.